

México: fin de régimen

Las siguientes reflexiones tienen como propósito sistematizar algunas hipótesis explicativas sobre la naturaleza de los principales acontecimientos políticos que sacudieron a la sociedad mexicana a lo largo de 1994 y principios del presente año.

Los hechos fundamentales son de todos conocidos y han sido reseñados ampliamente por la prensa local: el alzamiento indígena (Zapatista) en el sudeste mexicano; los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, candidato a la presidencia y secretario nacional del Partido de la Revolución Institucionalizada (PRI), respectivamente; los secuestros de connotados empresarios y banqueros como Alfredo Harp y Angel Lozada; la dinámica del proceso y los resultados relativamente sorprendidos de las elecciones federales del 21 de agosto; el estrépido y profundo colapso de la presuntamente boyante economía; el rompimiento del cese del fuego por parte del ejército junto a la recuperación de posiciones militares estratégicas ocupadas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN); y, finalmente, el reciente arresto de Raúl Salinas, hermano del ex presidente Carlos Salinas.

Se trata, en efecto, de un esfuerzo reflexivo que persigue, ante todo, analizar y explicar omnicomprendentemente el significado de esos acontecimientos inéditos, inesperados, violentos y profundamente perturbadores de la otrora extraordinaria estabilidad del régimen político mexicano.

El panorama esbozado anteriormente señala que México está cambiando como nunca antes lo había hecho en período alguno de su historia reciente. Estos cambios se han manifestado con agudeza en las esferas de la economía y la política, las cuales se encuentran sobrecalentadas, debido a que el país atraviesa por una etapa de fin de régimen. Es decir, lo que está cambiando en México son, ante todo, las antiguas reglas y los mecanismos del ejercicio del poder y, con ello, los presupuestos sobre los cuales se había organizado hasta ahora la convivencia social de la nación. La consecuencia lógica de dicho proceso, por lo tanto, consiste en que la nación mexicana se encuentra dentro de una etapa intermedia, necesariamente ambigua e incierta, a partir de la cual se afirmaría, al final, la vigencia de la democracia o, en el peor de los casos, del autoritarismo.

Ese complejo y conflictivo panorama de la política mexicana debe ser interpretado desde dos presupuestos básicos. El primero afirma que la descomposición del sistema político es producto del surgimiento de importantes divisiones dentro de la élite de poder. Divisiones que ya no encuentran causas relativamente pacíficas e institucionalizadas para dirimirse como al parecer habría acontecido en el pasado reciente. El segundo es de carácter más axiológico. Sostiene que la democracia no resolverá por sí sola los grandes problemas de México, pero sin ella no existen verdaderas soluciones. En este sentido, si existe acaso una solu-

ción para la actual y grave incertidumbre así como para la obvia amenaza de la agudización del proceso de descomposición y violencia en ciernes, ésta pasa inexorablemente por la democratización del régimen político y por el reverdecimiento de la sociedad civil.

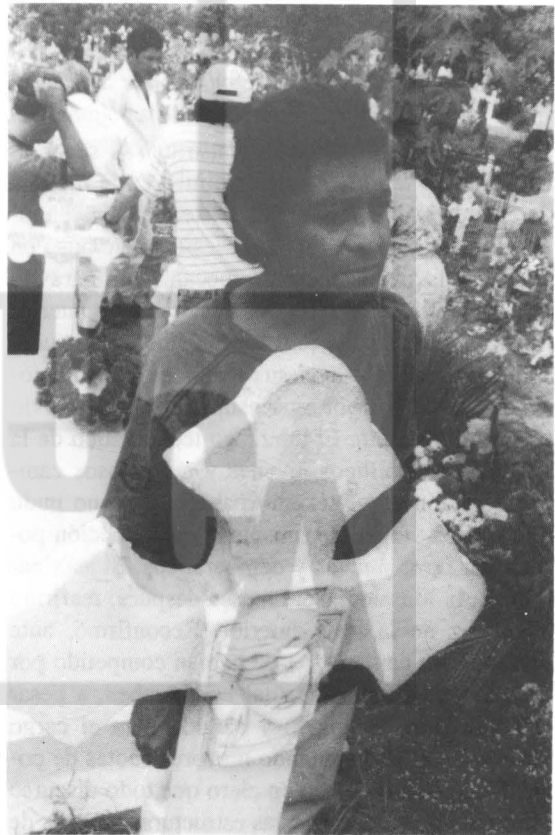
El régimen político mexicano ha desafiado todo esfuerzo de conceptualización rigurosa por parte de los politólogos más connotados del mundo. Se trata, nos dicen en el mejor de los casos, de un régimen político *sui generis*, a medio camino entre el autoritarismo y la democracia. Ello, en efecto, no es mucho decir. Pero este tipo de análisis ha puesto mucho énfasis en resaltar particularidades como las siguientes: la capacidad del régimen para cooptar a la oposición, para aglutinar a la clase política en torno a un mecanismo de intermediación —también muy *sui generis* como el PRI—, para crear esquemas corporativos de inclusión y manipulación de los sectores obreros y campesinos, para mantener un exacerbado presidencialismo, etc.

A partir de 1988, sin embargo, este sistema político experimentó desafíos de una magnitud sin precedentes. Estos desafíos fueron enfrentados con relativo éxito, a partir de un proceso de apertura y liberalización política controlada y muy limitada y de una reforma de importantes proporciones en el área económica. Con todo, el régimen no logró recuperar su otrora estabilidad política. La apertura liberalizadora no pudo evitar el surgimiento y la consolidación de una oposición política real que incluso ha mostrado una vertiente militar. El régimen, si bien todavía no ha colapsado de manera definitiva, ha dado muestras evidentes de encontrarse en crisis. A continuación revisaremos, aunque muy rápidamente, los alcances y las manifestaciones de dicha crisis.

El surgimiento de una izquierda armada fue el detonante de la crisis de final del sexenio más importante de la que se tenga memoria en los tiempos modernos. Las masas indígenas manifestaron su descontento ante una política de marginación y exclusión milenaria. El impacto político más importante se manifestó y articuló por medio de una reforma electoral —conocida como los acuerdos de Barcelona— que corrigió, en principio, las in-

suficiencias de las dos reformas del sexenio en la materia. A pesar de ello, la reforma resultó, después de todo, viciada y defectuosa. La auditoría externa del padrón, la presencia de observadores electorales —nacionales y extranjeros—, la configuración de los órganos electorales, la introducción tardía de los consejeros ciudadanos, la desigualdad rampante en el uso de los medios de comunicación, etc., se realizaron más en términos de legitimar un sistema político corrupto que para crear condiciones equitativas en la contienda.

En suma, pues, la respuesta política al alzamiento indígena confirmó la incapacidad del régimen mexicano para reformarse. Es decir, para existir sin recurrir a sus vicios peores. También la oposición incurrió en graves errores estratégicos y así facilitó la reafirmación del régimen. Ante todo, aceptó participar —sin negociar con el sistema los términos de su participación o franca y llanamente retirarse ante la ausencia de condiciones— en un



proceso electoral en condiciones de desigualdad, donde el partido de Estado la superó escandalosamente en recursos, apoyos y control de los procedimientos.

La oposición también cometió errores tácticos incomprensibles e injustificables. Evitó apostar por las clases medias —más proclives a la participación electoral— y se concentró en los sectores más oprimidos, radicalizados, pero más fácilmente excluidos por el sistema de los mecanismos de participación democrática. El gobierno, en cambio, se salió con la suya. Capitalizó a su favor de manera propagandística el estallido chiapaneco y realizó una campaña centrada en el miedo. Es decir, una campaña electoral enfocada al futuro —no en una evaluación objetiva de los saldos del sexenio—, sin comprometerse a mostrar su programa de gobierno. En efecto, la propaganda gubernamental insistió en el futuro incierto si llegaban al poder los candidatos de la oposición Cuauhtémoc Cárdenas (izquierda) o Diego Fernández de Cevallos (derecha). Por supuesto, la falta de unidad en la oposición real —PRD y PAN— concedió un holgado margen de acción al gobierno para salirse con la suya.

El asesinato de Colosio constituyó el segundo detonante de la mayor crisis política en la historia reciente de México. Más que una explosión espontánea de las masas a raíz del asesinato, se puso en evidencia la inexistencia de mecanismos para resolver pacíficamente las discrepancias al interior de las élites de poder. El mecanismo de la sucesión presidencial —con sus lealtades e instituciones diseñadas para otorgar estabilidad— se volvió de pronto obsoleto. El liderazgo tecnocrático de la camarilla de políticos jóvenes y ambiciosos cambió la nación en el sexenio pasado, pero no pudo sustituir los viejos mecanismos de conducción política por otros nuevos y democráticos. El asesinato de Ruiz Massieu, siete meses después, reafirmó la validez de la tesis anterior. Reconfirmó, ante todo, que las camarillas que habían competido por alcanzar la silla presidencial continuaban, a pesar de haber sido designado y elegido para el cargo Ernesto Zedillo, disputando mayores cuotas de poder. El asesinato dejaba en claro que todo discurso o intento por modernizar las estructuras injustas de

la competencia política no sería tolerado.

En efecto, uno de los componentes centrales del régimen mexicano es su partido de Estado. La naturaleza hegemónica del Partido Revolucionario Institucional y su íntima vinculación con el Estado hacen imposible la competencia democrática. De ahí que el análisis de la campaña electoral y sus relativamente sorprendentes resultados, deba concentrarse en destacar los vicios de origen y de fondo del proceso. Estos vicios distorsionaron la voluntad popular y al hacerlo, cometieron una injusticia. Ciertamente, sin romper la estrecha relación entre el gobierno y el partido de Estado es imposible una competencia electoral verdaderamente justa. Un aparato impresionante que cuenta con recursos, influencias, información, complicidades y apoyos no permite el triunfo de ninguna oposición, máxime si ésta se encuentra —como en el caso de la mexicana— trágicamente dividida.

En segundo lugar, la competencia política se vuelve desigual por la injusta difusión de la información en los medios masivos. Aquí cabe destacar la complicidad de los empresas de comunicación con el gobierno y su campaña uniforme y tendenciosa campaña, que maliciosamente tendió a identificar al Partido Revolucionario Institucional con la paz y la estabilidad y a la oposición con la violencia y el caos. El tercer factor de deslegitimación de las elecciones fue introducido por los partidos progubernamentales, que distorsionaron de manera inaceptable el funcionamiento del subsistema de partidos. El resultado de este panorama no pudo ser otro que unas elecciones amañadas, injustas y desprovistas de las discusiones de fondo que permiten a las sociedades sentir que sus grandes disyuntivas han sido examinadas con seriedad y consecuencia.

El año 1994 había sido, en consecuencia, particularmente trágico para México. Con todo, los límites de la crisis parecían circunscritos a la esfera exclusiva del terreno político. Sin embargo, el año concluyó con el estallido de la crisis financiera más importante desde 1982. En realidad, la crisis era inminente desde 1993, pero fue ocultada deliberada e irresponsablemente por la élite gobernante. La crisis creció como una bola de nieve cuesta abajo, adquiriendo proporciones inmensas, cuyas

secuelas desafortunadamente todavía no parecen tocar fondo. La crisis, además, puso en evidencia el talón de Aquiles del esquema de crecimiento económico, basado en la captación agresiva de la inversión extranjera. La crisis mostró, entre otras cosas, que dicha inversión se destinó en su mayor parte a la especulación con alta rentabilidad de corto plazo (capitales golondrinos) y no a la modernización y creación de una sólida infraestructura productiva.

Paradójicamente, en muchos sentidos, el mismo gobierno mexicano favoreció ese esquema de inversión con la venta masiva de valores gubernamentales a inversionistas extranjeros quienes, naturalmente, estaban protegidos de cualquier oscilación de la moneda nacional. Disfrazando, entonces, la deuda externa como deuda interna, el estallido de la crisis económica estaba en verdad a la orden del día en el momento mismo que la inestabilidad política hiciera cundir el pánico entre los inversionistas extranjeros.

El mandato de Ernesto Zedillo se inició, por lo tanto, en el peor de los escenarios posibles. Para afirmar su autoridad y recuperar su legitimidad, Zedillo ha recurrido al viejo truco político de protagonizar acciones típicamente espectaculares. La recuperación por parte del ejército mexicano del control de los municipios de Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano y otros en la conflictiva zona de los altos de Chiapas junto a la revelación de la identidad del subcomandante Marcos forman parte

de esta lógica. El arresto de Raúl Salinas, hermano mayor del ex presidente Carlos Salinas, presunto autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu también forma parte del esfuerzo para afirmar la autoridad presidencial. Con todo, los cálculos de los asesores presidenciales han sido superados por la complejidad de la coyuntura mexicana. En este sentido, los resultados de estas medidas han terminado siendo controvertidos y han socavado todavía más las antiguas reglas no escritas que ordenaban y regulaban el régimen político mexicano.

De esta suerte, el nuevo año, pues, en contra de todas las esperanzas del pueblo mexicano por alcanzar al fin una auténtica y convincente salida a la situación de inestabilidad y caos, arrancó y se enfiló hacia una mayor descomposición de los mecanismos e instituciones reguladores de la convivencia social. Así, pues, esta avalancha de acontecimientos se ha traducido, en el plano de la política, en un presidente débil —forzado a hacer malabarismos para afirmarse—, en un gobierno incapaz y en una clase política dividida y confrontada; mientras que, en el plano económico, tenemos a un país en bancarota, sometido a la humillación y al chantaje estadounidense —no obstante ser tradicional y legítimamente nacionalista—, junto a un pequeño grupo de especuladores privilegiados que despiadadamente han lucrado impresionantes ganancias a costa de la riqueza y del patrimonio de todos los mexicanos.

A. S.